

**GÉNEROS DE OPINIÓN DE  
JEFA DE GOBIERNO**



Signos vitales

40

Alberto Aguirre  
alberto.aguirre@eleconomista.mx

## ¿Oscilaciones panistas?

Con una trayectoria de tres décadas, **Juan Antonio Martín del Campo** conoce perfectamente el ideario panista. Tanto como dirigente —ha sido consejero y presidente del comité estatal en su natal Aguascalientes—, como legislador (dos veces diputado local y dos veces, senador) y como alcalde de la capital hidrocálida.

Es muy poco probable, por lo tanto, que haya desobedecido la línea de la cúpula blanquiazul cuando ayer, en el Pleno del Senado de la República, públicamente manifestó su aprobación a la propuesta de "simplificación orgánica" de la Administración Pública Federal impulsada desde Palacio Nacional.

"Hay aspectos relevantes que merecen nuestro respaldo", definió Martín del Campo, "siempre y cuando se mantengan los principios de transparencia, eficiencia y compromiso con los ciudadanos".

La creación de las secretarías de la Mujer y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y también, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, merecieron el voto favorable del legislador blanquiazul, quien —para aclarar dudas— definió sobre la postura imperante al interior de su bancada:

"Seremos una oposición responsable, que responde a las necesidades de adaptarnos a un contexto cambiante y que da la oportunidad a proyectos que puedan tener desafíos reales para los mexicanos", argumentó, "sin embargo, no bajaremos la guardia: este voto de confianza se da con la condición de que se garantice la correcta implementación de estas reformas, así como en materia de seguridad en donde sin ningún problema votamos a favor porque queremos un México más en paz, más seguro, en tranquilidad".

Además del respaldo a dos de las principales reformas promovidas por la administración de **Claudia Sheinbaum**, los parlamentarios del PAN públicamente cerraron filas con el Ejecutivo federal, ante los amagos del presidente elector de Estados Unidos.

Salvo los desplantes de **Lily Téllez**, el mensaje es claro: el PAN en el Senado está abiertamente a favor de las instituciones, pero en contra de la vulneración de los derechos humanos, la información y los datos personales.

**Marko Cortés** —quien recién dejó la presidencia del CEN panista— encabezó la votación de la bancada panista contra del dictamen a la minuta en materia de prisión preventiva oficiosa. Y otro expresidente panista, **Ricardo Anaya**, definió las objeciones del partido derechoista a la reforma administrativa del gobierno entrante. "No vamos a acompañar la desaparición del Inai, el que una nueva secretaría de la administración pública centralizada absorba las facultades del órgano autónomo; nos parece un verdadero despropósito", sentenció.

La defensa de la transparencia y el acceso a la información gubernamental es la primera divisa abrazada por el nuevo dirigente nacional del blanquiazul, **Jorge Romero**, quien fracasó en su primer intento de entablar un diálogo con la Presidencia de la República.

### Efectos secundarios

TRIVIAS. Sede de los Miami Dolphins y el equipo de la Universidad de Miami, el estadio Hard Rock también alberga la Orange Bowl, partidos internacionales de fútbol soccer y conciertos de gran formato. En uno de estos últimos —el de **Taylor Swift**— entre los asistentes VIP pudo reconocerse a un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y encumbrado aliado de la 4T. Más recientemente, hace 10 días, en los *living room boxes*, que tienen butacas Hollywood del mismo color celeste del equipo anfitrión, había un grupo de entusiastas aficionados mexicanos para ver el encuentro entre los Delfines y los Raiders de Las Vegas. Entre ellos, un integrante del gabinete de **Clara Brugada**, encargado de investigar los casos de corrupción en la administración capitalina. Eso no es lo peor, sino que ese hospitality habría sido patrocinado por directivos de Broxel Fintech. ¡Orale!



**SERGIO AGUAYO**

@sergioaguayo



Con la "Operación Enjambre" el gobierno de Sheinbaum mueve ficha en el espacio más estratégico para el régimen.

# Salvar la CDMX

La esencia de la Operación Enjambre –primer operativo importante de la presidenta Claudia Sheinbaum– es ampliar el perímetro de seguridad capitalino para resquebrajar algunos de los cercos criminales que van rodeando la capital.

En las primeras décadas de este siglo hubo un reacomodo de fuerzas políticas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (la capital, 59 municipios mexiquenses y uno hidalgense). La izquierda partidista (PRD y Morena) fue ocupando los espacios dejados por un priismo en retirada. En *La fortaleza capitalina*, Rodrigo Peña (Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México) documenta la reducción del delito en la capital y su incremento en el Estado de México (Edomex) y en la zona conurbada. De ese estudio rescato una cifra clave: en 2022, la CDMX tenía 8.64 policías por cada mil habitantes y el Edomex 0.88.

Lógico que, como me comentara Abraham Serrano –excomisario jefe de la policía de Atizapán–, creciera el número de "criminales con placa en el Edomex". Operativo Enjambre se fue contra mandos políticos y policiacos al servicio de la delincuencia, una pieza clave del pacto de impunidad. Los 12 municipios mexi-

quenses incluidos en Enjambre son polígonos estratégicos que conectan a la ZMVM con las redes criminales de Guerrero, Morelos, Michoacán, Querétaro e Hidalgo.

La operación empezó en septiembre, cuando detuvieron a cinco jefes policiacos mexiquenses que, según una fuente versada en el operativo, entregaron información para el complejo despliegue gubernamental del viernes pasado. Si pensamos en resultados, Enjambre cosechó éxitos y mostró debilidades.

Resultó espectacular la detención de funcionarios presuntamente al servicio de criminales. Es igualmente destacable el cuidado puesto a los detalles. Me detengo en el tuit enviado por Omar García Harfuch para informar sobre el operativo. Primero mencionó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego a la Sedena, la Marina y la FGR para dejar al final a la SSPC cuyo titular aclaró, en un arrebato de modestia, que fue una participación a través del Centro Nacional de Inteligencia. La suma de los diversos se lubrica con un trato atercio-

pelado a los egos institucionales o personales.

El sistema de contrainteligencia tuvo, sin embargo, fallas importantes pues se fugaron siete personas servidoras públicas, entre ellas dos alcaldesas y cuatro mandos policiacos que recibieron, supongo, un pitazo de San Judas Tadeo. Una falla laceraante fue el escape del director de Seguridad de Coacalco, el municipio conurbado en el cual ejecutaron el pasado 21 de julio a Milton Morales Figueroa, mano derecha del propio García Harfuch. También resultó absurdo que no desarmaran y esposaran al director de la policía de Texcaltitlán; mientras le leían la orden de aprehensión aprovechó para meterse un balazo.

El logro más notable por inédito es la sintonía en el diagnóstico de las tres mujeres que gobiernan el país y la ZMVM: Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Delfina Gómez. Las tres comparten la urgencia por tener una visión metropolitana en materia de seguridad. Estaba anunciado. En noviembre pasado supimos, por funcionarios de la ZMVM, que trabajaban en la creación de una Policía Metropolitana y en la fusión de los sistemas de videovigilancia. Es obvia la intención de seguir consolidándose como la principal fuerza política de la ZMVM. Objetivo válido porque estamos hartos del rollo y urgidos de resultados "concretitos", como diría el inolvidable Luis González de Alba. Lástima que al mismo tiempo suelten manotazos autoritarios con la reforma judicial y los organismos autónomos.

A esta historia le faltan capítulos. En lo inmediato viene la reacción de las organizaciones

criminales privadas de sus cuartos en gobiernos locales. ¿Qué harán el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana o las uniones Tepito y Anti-Tepito? ¿Responderán en la capital o lo harán en otras partes de México? ¿Cuál será el siguiente operativo gubernamental?

Por ahora, lo único cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum mueve ficha en el espacio más estratégico para el régimen: el Estado de México, entidad clave para la ZMVM. Una maniobra lógica si atendemos a la frase con la cual Napoleón entronizó la geopolítica: "la guerra es un asunto de posiciones".

Colaboró Sebastián Rodríguez.



## Enjambres de corrupción 9

**TIEMPO NUEVO**

**SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS**



sgchipres1@hotmail.com / @guerrerochipres

**P**udo haber sido un malentendido, aunque las palabras del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, colocaron en el centro un tema revelador de los riesgos de la debilidad institucional: la colusión entre autoridades y criminales.

No se requiere un gran análisis semántico para dar credibilidad a la explicación posterior del mandatario. “Ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”, fue su primer dicho. “Son enfrentamientos, son confrontaciones”, aclaró posteriormente.

El contexto sinaloense demanda precisión —o como se podría decir coloquialmente, ese horno no está para bollos— frente al deterioro de seguridad evidenciado en los últimos meses. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos pasaron de 39 a 141 entre agosto y octubre.

Entre las razones, además de la pugna entre grupos rivales del crimen organizado, está la delimitación de las fronteras de lo inadmisibles en cuanto a la presencia delictiva. El crimen busca extenderse, mientras la autoridad limita sus márgenes.

El operativo Enjambre en el Estado de México es demostración de la línea fronteriza, como lo es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aprobada ayer en Comisiones del Senado, entre ellos la extorsión.

Ante la delincuencia no hay posibilidad de negociación, no hay espacio para la colusión ni para encuentros en lo oscuro o acuerdos por debajo de la mesa, a riesgo de enfrentar casos como el de Genaro García Luna, exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por sus nexos con cárteles del narcotráfico.

Desenredar el enjambre y recomponer el deterioro en seguridad demanda inteligencia política y policial. La hubo en la operación desarrollada por varios meses en el Estado de México entre autoridades federales y locales —Defensa, Guardia Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Policía estatal—, que llevó a la captura de la alcaldesa y el jefe de la Policía de Amanalco, el esposo de la presidenta municipal de Tonalco, mandos policiales de Ixtapaluca, Naucalpan y Tejupilco y la muerte por suicidio de un oficial de Texcaltitlán.

El mensaje es claro: “No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había anunciado las detenciones.

Investigación e inteligencia, dos de los ejes contra la delincuencia iniciados en la Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada, son centrales en una estrategia que no admite enjambres de corrupción. De ahí la importancia del C5 en la capital nacional, inversamente revelada en Sinaloa, donde se destruyen más de 80 videocámaras: una comunidad más securitizada que otra.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS.



CIVITAS



**DISPAROS VS VIDEOVIGILANCIA**

POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

**I**mposible no coincidir con esta afirmación: “colusión de autoridades con crimen organizado es lo peor y deriva en escaladas de violencia”, expresada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un contexto no retórico sino material, lo cual involucra acciones y repercusiones de lo efectivamente realizado por instituciones de seguridad, por los integrantes de la delincuencia más organizada y potencialmente peligrosa, las afirmaciones y acciones de gobernantes –o sus omisiones– y delincuentes debe ser puesto en una luz sencilla y diáfana.

Las y los gobernantes de las entidades de nuestra espléndida nación están obligados a ser eficientes frente a la incidencia delictiva.

Lo dice la norma, la opinión pública, las familias de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y los propios integrantes de esos equipos de gobierno, con independencia de su formación profesional y en estrecha conexión con el compromiso asumido en tanto servidores públicos designados y electos.

Si el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoce, afirma, indica, parafrasea, así sea equívocamente, que “ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”, pone en riesgo el vestigio de la imagen de su propio gobierno en un contexto de exigencia tan alto como el de Sheinbaum y tan bajo como su propia capacidad de contener la violencia entre grupos delincuenciales de su entidad de nacimiento. Luego intentó corregir.

Diferentes estimaciones periodísticas ubican entre 65 y 80 el número de cámaras de videovigilancia de Culiacán, gestionadas por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa (C4i), destruidas por el crimen, y arruinadas el conjunto de las mismas en un 50 por ciento. La impunidad permanece incontentida en esa entidad. ¿Nos imaginamos algo semejante para el caso de la CDMX? Imposible con el liderazgo de Clara Brugada, la más eficiente gobernante local del país.

El Gobernador Rocha, en ese contexto, donde existe una violencia ininterrumpida entre grupos delictivos, continúa, tal vez involuntariamente, en su inhabilidad de expresar, en lo retórico y en la acción de gobierno, una determinación exitosa para establecer un límite frente a la violencia impune.

Agredir la estructura de la videovigilancia, atenta en su significado más que en su magnitud, en contra de una noción del Estado en el cual este es, como debe ser, capaz de proporcionar insumos prácticos, de inteligencia, para la persecución del delito, a la cual se dedican presupuestos, capacidades y habilidades de estructuras institucionales obligadas, como lo ha indicado la Presidenta y ha orientado el Poder Legislativo al ampliar facultades de la estructura de seguridad capitaneada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

¿Cuánta impunidad hay en Sinaloa? ¿Es del tamaño de la incapacidad? Si debieran responder las cámaras, no sería posible dado el violento cese de su vida útil.



**ALTAVOZ**  
**SALVADOR**  
**GUERRERO**  
**CHIPRÉS**

@guerrerochipres



## CDMX, intensa... mente con la salud

CUIDAR EMOCIONES, UN DERECHO

El dato expuesto por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, ilustra una enorme necesidad y revela desigualdad estructural: siete de cada diez personas no encontraron atención para su salud emocional cuando la requirieron.

Así de triste puede ser el panorama ante la urgencia de apoyo por ansiedad o depresión, las principales afecciones mentales, no solo en México sino en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada ocho personas vive con un trastorno mental, mientras el suicidio es la cuarta causa de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años.

En ciudades progresistas, el cuida-

do de la mente y las emociones no debe ser un lujo, sino un derecho y elemento central de las políticas públicas. En Reikiavik, Islandia, las y los estudiantes reciben educación emocional como parte de sus materias, y en Nueva York hay consejeros de salud mental en escuelas públicas.

Desde la CDMX se modela el programa Ciudad con Salud Emocional, presentado ayer por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Representa la oportunidad de recibir atención en cada Utopía en los Cuencos de las Emociones—acrónimo de Cuenta Conmigo— y la canalización a servicios especializados desde el 911, atendido por el C5, y Locatel.

La prioridad son las personas más vulnerables, entre ellas mujeres, quienes representan el 70 por ciento de quienes buscan ayuda del Consejo Ciudadano de la capital nacional, o las y los jóvenes. El IAPA, dirigido por Amaya Ordorika, estima que 84 por ciento de las y los universitarios presenta ansiedad o depresión.

Es responsabilidad del Estado garantizar la salud mental, con perspectiva de género y un enfoque preventivo. En México está considerado en la Ley General de Salud; en la CDMX, además, está previsto en la Constitución.

Todas las personas requieren acceso a servicios de salud mental de calidad. La Ciudad se coloca, intensamente, a la vanguardia nacional.